



# **DROGAS, POLÍTICA Y CULTURA**

PERSPECTIVAS BRASIL-MEXICO

## **Declaratoria en Español**

English · Português  
Page 4 · Página 7

## El Momento es Hoy

### Declaratoria Guadalajara

Las Naciones Unidas identifican cinco “consecuencias negativas no deseadas” que se generan a partir de la prohibición de las drogas y las políticas de las mismas, incluyendo: un mercado criminal que desestabiliza a los países, genera violencia y encarcela a millones de personas cada año; un enfoque punitivo alejado de la salud pública; y el efecto globo, donde el cultivo, el tráfico y el consumo de sustancias se desplazan de un territorio a otro sin desaparecer alimentando la discriminación y el estigma contra las personas que usan drogas. Este fracaso es altamente visible en México y Brasil, los dos países más poblados de América Latina.

Los derechos humanos forman parte fundamental del derecho internacional, apareciendo en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, en las tres convenciones más importantes sobre drogas (1961, 1971, y 1988) sólo se hace alusión a los Derechos Humanos una vez, señalando la enorme brecha entre el respeto a los mismos y el control de drogas. Siguiendo las convenciones sobre drogas, la mayoría de los países han violado las convenciones de Derechos Humanos, algo que no aceptamos. Además, los Estados deben garantizar el acceso a los medicamentos controlados, incluidos los opiáceos, necesarios para aliviar el dolor, proveer cuidados paliativos, servir de anestesia, atender la dependencia y mitigar otras formas de sufrimiento.

De igual forma, los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones indígenas han sido fuertemente violados en nombre del control de drogas, con miles de personas siendo criminalizadas por producir o consumir plantas que han formado parte integral de su historia, cultura, identidad, rituales y tradiciones. El uso de drogas es parte de la realidad y está profundamente integrado en prácticas y cosmologías de diferentes pueblos y sociedades. La criminalización de grandes contingentes de personas provenientes de estos grupos ha causado profundos daños en su autonomía, cultura y tejido social.

Con docenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados en los últimos siete años, México se encuentra frente a una crisis humanitaria causada por la estrategia represiva de combate al tráfico de drogas y por la violencia de las organizaciones criminales. Brasil, por su parte, tiene más de 56,000 muertes violentas cada año, la mayoría de jóvenes afrodescendientes siendo el tercer país con mayor población carcelaria a nivel mundial, con cerca del 27% de los encarcelados por delitos relacionados a las drogas.

La criminalización de actores involucrados con drogas ilegales es siempre selectiva, afectando desproporcionadamente a los más pobres, a las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los afrodescendientes. En toda América Latina el crimen de tráfico de drogas es lo que más afecta mujeres, especialmente a las más jóvenes y pobres y a las madres solteras y jefas de familia que frecuentemente cuentan con baja escolaridad, son responsables por el cuidado de sus hijos y de otros miembros de su familia y pertenecen a minorías étnicas (negras, indígenas y latinas). En Brasil, cerca del 55% de las mujeres encarceladas son negras mientras que en México hay un número significativo de mujeres indígenas en prisión por delitos relacionados con las drogas.

Considerando que los esfuerzos hasta ahora han fracasado y tomando en cuenta la próxima Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas (UNGASS 2016) y los contextos actuales de Brasil y México, recomendamos:

- Promover el respeto al uso terapéutico, medicinal, religioso y recreativo de las drogas en nuestras tradiciones y culturas;
- Integrar la participación de la sociedad, las personas que usan drogas, las víctimas, los cultivadores y los grupos más afectados en la construcción de las políticas de drogas;
- Desarrollar políticas públicas basadas en conocimientos científicos y éticos, que garanticen el pleno respeto a los derechos culturales de los pueblos y los principios de las garantías de derechos humanos;
- Respetar la soberanía de naciones y pueblos en temas de política de drogas; y descentralizar las decisiones sobre políticas de drogas;
- Implementar una descriminalización efectiva de todo uso de drogas;
- Impulsar el acceso a atención y tratamientos dignos y humanitarios para usos problemáticos de drogas;
- Fomentar la investigación científica sobre los efectos de las drogas, así como los potenciales terapéuticos de las sustancias psicoactivas, especialmente de la cannabis y de los psicodélicos;
- Apoyar la inmediata regulación legal de los mercados de cannabis, la droga ilegal más consumida en el mundo;
- Revisar y cambiar los indicadores de las políticas de control de drogas; y
- Asegurar la producción y/o importación de medicinas esenciales para el tratamiento del dolor, tanto de las sustancias prohibidas como el cannabis, cuyas numerosas aplicaciones terapéuticas han sido demostradas por una amplia literatura científica, como de sustancias controladas como los opiáceos y de todos los medicamentos que se encuentran en la lista de medicinas esenciales de la OMS.

Los daños del paradigma prohibicionista en el sistema de fiscalización internacional de drogas han sido devastadores y es hora de reconocer que el uso de drogas psicoactivas es un fenómeno intrínseco de la experiencia humana y crear nuevas políticas que respeten los derechos humanos, promuevan la salud pública y la protección social y cultiven el desarrollo en Latinoamérica. El momento es hoy.

Congreso Drogas, Política y Cultura: Perspectivas Brasil-México.  
Guadalajara, 6 de octubre de 2015.



# **DROGAS, POLÍTICA Y CULTURA**

PERSPECTIVAS BRASIL-MEXICO

## **English Declaration**

Español · Português  
*Página 1*      *Página 7*

# Guadalajara Declaration

## The Time is Now

According to the United Nations, there are five key “unintended consequences” that have emerged due to the prohibition of drugs, including: a criminal black market that destabilizes countries, generates violence and incarcerates millions of people each year; a punitive-based approach, rather than one focused on public health; the balloon effect, during which the cultivation, traffic or consumption of substances are displaced from one territory to another, but the production, traffic or consumption does not reduce and simply shifts; and finally, the discrimination and stigma against people who use drugs. This failure is highly visible in the two most populated countries of Latin America: Mexico and Brazil.

With the inclusion of human rights in the United Nations Charter and the United Nations Universal Declaration of Human Rights, human rights form a fundamental part of international law. However there is only one mention of human rights within the three primary international drug control conventions (1961, 1971 and 1988), demonstrating the large breach between human rights and drug control. By punitively applying the drug conventions, many countries violate basic human rights, which we conclude to be unacceptable. Additionally, as part of the drug control conventions mandate, Member States should guarantee access to controlled medicines, including opiates, which are necessary to alleviate pain, assist in hospice care, serve as anesthesia, attend dependencies and mitigate other forms of suffering.

Similarly, economic, social and cultural rights of indigenous populations have been continuously violated because of drug control measures, with thousands of people being criminalized for producing or consuming plants that have been part of their history, culture, identity, rituals and traditions. The use of drugs has been part of humanity’s reality, and it is intimately blended in practices and perspectives of different societies. The criminalization of large numbers of people from these groups has caused extensive harm to their autonomy, culture and social cohesion.

With tens of thousands of people dead, disappeared and displaced in the last seven years, Mexico is currently experiencing a humanitarian crisis caused by the repressive strategy to combat drug trafficking. Brazil currently has more than 56,000 violent homicides each year, most of them Afro-Brazilian youth, in addition to being the third country with the highest rate of incarceration, with nearly 27% of people in prison for crimes related to drugs.

The criminalization of people involved with illegal drugs can be discriminatory, affecting the poor, women, youth, and indigenous and afro populations. Throughout Latin America crimes related to drug trafficking have disproportionately impacted women, particularly young women, single mothers, and housewives with low education levels, who are responsible for caring for their children and other members of their family, many of whom belong to ethnic minorities (afro, indigenous and Latinos). Nearly 55% of the women incarcerated in Brazil are of afro descent, and in Mexico there is a significant number of indigenous women in prison due to drug-related crimes.

In anticipation of the United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS 2016) and considering the failure of the current drug control measures, particularly in the Brazil and Mexico contexts, we recommend that governments work towards policies that:

- Promote respect for therapeutic, medical, religious and recreational drug use in our traditions and cultures;
- Foment the participation of civil society, including people who use drugs, victims, cultivators and those groups most affected by current drug policies;
- Develop public policies based on scientific and ethical evidence, which guarantee full respect of cultural and fundamental human rights;
- Respect the sovereignty of nations and populations regarding issues related to drug policies, including decentralizing drug policy making;
- Implement effective decriminalization of all uses of drugs;
- Ensure access to humane attention and treatment for problematic drug use;
- Foster scientific investigation about the effects of drugs, as well as the therapeutic potential of psychoactive substances, particularly that of cannabis and psychedelics;
- Support immediate legal, regulation of cannabis markets, the most consumed illegal drug in the world;
- Review and change indicators and metrics related to drug control policies; and
- Assure the production and/or importation of essential medicines and controlled substances, including cannabis, opiates and all medicines that are part of the World Health Organization (WHO) list for the treatment of pain and suffering, whose numerous therapeutic applications have been proven by a wide scientific literature.

The harms of the prohibitionist paradigm within the international drug control system have been devastating and it is time to acknowledge that the use of psychoactive drugs is an intrinsic phenomenon of the human experience, making it necessary to promote public health and social protection, while fostering development in Latin America. The moment is now.

Drugs, Politics and Culture Congress: Brazil-Mexico Perspectives.  
Guadalajara, October 6th, 2015.



# **DROGAS, POLÍTICA Y CULTURA**

PERSPECTIVAS BRASIL-MEXICO

**Declaração em Português**

Español · English  
*Page 1*      *Page 4*

## O Momento é Agora

### Declaração de Guadalajara

A Organização das Nações Unidas identifica cinco “consequências negativas não de-sejadas” decorrentes da proibição e de controle de drogas, incluindo: um mercado criminoso que desestabiliza os países, gera violência e encarcera milhões de pessoas a cada ano; um enfoque punitivo alheio à saúde pública; e o efeito balão, onde o culti-vo, tráfico e consumo de substâncias se deslocam de um território para outro sem de-saparecer, alimentando a discriminação e o estigma contra as pessoas que usam dro-gas. Este fracasso é altamente visível no México e no Brasil, os dois países mais po-pulosos da América Latina.

Os direitos humanos são parte fundamental do direito internacional, aparecendo na Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, nas três convenções mais importantes sobre drogas (1961, 1971 e 1988), os Direi-tos Humanos são mencionados apenas uma vez, assinalando a enorme brecha existen-te entre o respeito a eles e o controle sobre as drogas. Seguindo as convenções sobre drogas, a maioria dos países violam as convenções de Direitos Humanos, algo que não aceitamos. Além disso, os Estados devem garantir o acesso aos medicamentos controlados, incluindo os opiáceos, necessários para aliviar a dor, oferecer cuidados paliativos, servir como anestesia, atender à dependência e mitigar outras formas de sofrimento.

Da mesma maneira, os direitos econômicos, sociais e culturais das populações indíge-nas foram fortemente violados em nome do controle de drogas, com milhares de pes-soas sendo criminalizadas por produzir ou consumir plantas que constituem parte in-tegral de sua história, cultura, identidade, rituais e tradições. O uso de drogas faz parte da realidade e está profundamente integrado em práticas e cosmolo-gias de diferentes povos e sociedades. A criminalização de grandes contingentes de pessoas provenien-tes desses grupos causou profundos danos em sua autonomia, cultura e tecido social.

Com dezenas de milhares de mortos, desaparecidos e deslocados internos nos últimos sete anos, o México encontra-se frente a uma crise humanitária causada pela estraté-gia repressiva de combate ao tráfico de drogas e pela violência das organizações cri-minosas. O Brasil, por sua vez, apresenta mais de 56.000 mortes violentas por ano, a maioria de jovens afrodescendentes, sendo o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, com cerca de 27% das pessoas presas por delitos relacionados às drogas.

A criminalização de atores envolvidos com drogas ilegais é sempre seletiva, afetando desproporcional-mente os mais pobres, as mulheres, os jovens, os indígenas e os ne-gros. Em toda a América Latina, o crime de tráfico de drogas é o que mais afeta mu-lheres, especialmente as mais jovens, pobres, as mães solteiras e chefes de família que frequentemente têm baixa escolaridade, são responsáveis pelo cuidado dos filhos e de outros membros da família e pertencem a minorias étnicas (negras, indígenas e lati-nas). No Brasil, cerca de 55% das mulheres presas são negras, ao passo que, no Méxi-co, há um número significativo de mulheres indígenas na prisão por delitos relaciona-dos às drogas.



Considerando que os esforços até agora fracassaram e levando em conta a próxima Sessão Especial da Assembleia das Nações Unidas (UNGASS 2016) e os contextos atuais do Brasil e do México, recomendamos:

- Promover o respeito ao uso terapêutico, medicinal, religioso e recreativo das drogas em nossas tradições e culturas;
- Integrar a participação da sociedade, das pessoas que usam drogas, das vítimas, dos cultivadores e dos grupos mais afetados na construção das políticas de drogas;
- Desenvolver políticas públicas baseadas em conhecimentos científicos e princípios éticos, que garantam o pleno respeito aos direitos culturais dos povos e à garantia dos direitos humanos;
- Respeitar a soberania das nações e povos em temas de política de drogas; e descentralizar as decisões sobre políticas de drogas;
- Implementar uma descriminalização efetiva de todo o uso de drogas;
- Impulsionar o acesso à atenção e tratamentos dignos e humanitários para usos problemáticos de drogas;
- Fomentar a investigação científica sobre os efeitos das drogas, assim como os potenciais terapêuticos das substâncias psicoativas, especialmente da cannabis e dos psico-délicos;
- Apoiar a imediata regulação legal dos mercados de cannabis, a droga ilegal mais consumida no mundo;
- Revisar e alterar os indicadores das políticas de controle de drogas; e
- Assegurar a produção e/ou importação de remédios essenciais para o tratamento da dor, tanto das substâncias proibidas como a cannabis, cujas numerosas aplicações terapêuticas foram demonstradas por uma ampla literatura científica, como de substâncias controladas como os opiáceos e todos os medicamentos que se encontram na lista de remédios essenciais da OMS.

Os danos do paradigma proibicionista no sistema de fiscalização internacional de drogas têm sido devastadores e é hora de reconhecer que o uso de drogas psicoativas é um fenômeno intrínseco da experiência humana e criar novas políticas que respeitem os direitos humanos, promovam a saúde pública e a proteção social e cultivem o desenvolvimento na América Latina. O momento é agora.

Congresso Drogas, Política e Cultura: Perspectivas Brasil-México.  
Guadalajara, 6 de outubro de 2015.